

665

RV: Notificación Personal por Correo Electrónico Auto #0392 del 15 de 2024

Desde Sandra Paola Currea Andrade (CGR) <sandrap.currea@contraloria.gov.co>

Fecha Mié 15/01/2025 2:56 PM

Para Hernando Gonzalez Leon (CGR) <hernando.gonzalez@contraloria.gov.co>; Luis Alfonso Villalba Cruz (CGR) <luis.villalba@contraloria.gov.co>; G Ger Meta - Secretaria Comun (CGR) <sec.comun.meta@contraloria.gov.co>

1 archivo adjunto (2 MB)

Soportes entrega Notificaciones Auto 0392\_1.PDF;

Rdb  
16-01-2025  
CMA

Villavicencio, 15 de enero de 2025

Doctor

LUIS ALFONSO VILLALBA

Alcance: Devolución trámite de notificaciones Auto 0392 del 15 de noviembre de 2024

Comedidamente me permito remitir los soportes de las notificaciones personales relacionadas a continuación cuyos archivos adjuntos, se encuentran disponibles para su entrega física en la secretaria Común los días lunes y viernes entre las 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

**NOTIFICACIONES TERMINADAS**

NOMBRE	FECHA DE ENVIO NOTIFICACIÓN AL EMAIL AUTORIZADO	NOTIFICACIÓN PERSONAL
GONZALO MURILLO	18/12/2024	
SEGUROS COLPATRIA	18/12/2024	
PREVISORA SA	18/12/2024	
MARIA TONELLI		PERSONAL 13/01/2025
ANA ESTUPIÑAN	15/01/2025	
JULIO CESAR ZULETA FUENTES	18/12/2024	
CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL		PERSONAL 26/11/2024



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

GERENCIA DEPARTAMENTAL  
COLEGIADA DEL META

Secretaría comun  
80503 – S.C.  
Villavicencio – Meta.

Contraloría General de la República :: SGD 18-12-2024 09:28  
Al Contestar Cita Exa No.: 2024EE0247397 Folio Anexo: 0 FA: 0  
ORIGEN: 80503 GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE META / DIANA MARCELA ARISMENDY REY  
DESTINO: GONZALO MURILLO ESCOBAR  
ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO DEL AUTO NO. 0392 GONZALO MURILLO  
OBS

2024EE0247397



SEÑOR(a):

**GONZALO MURILLO ESCOBAR**

C.C. 7.538.570

[gonzalo.murillo@ecopetrol.com.co](mailto:gonzalo.murillo@ecopetrol.com.co)

Administrador del convenio 5211512

**Apoderado**

**Francisco Eladio Rojas Mendoza**

[Francrojas414@gmail.com](mailto:Francrojas414@gmail.com)

Villavicencio - Meta

**Asunto:** Notificación por correo electrónico del **Auto No. 0392 del 15 de noviembre de 2024.**

Dentro del **PRF No. 80503-2017-28946.**

**Contralor Provincial Ponente:** Luis Eduardo Vallejo Araujo.

**Abogado Sustanciador:** Luis Alfonso Villalba Cruz.

En virtud a la previa autorización de notificación por correo electrónico de la presente providencia, me permito remitirle en archivo adjunto **Auto No. 0392 del 15 de noviembre de 2024 "AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PRF DOBLE INSTANCIA No. 80503-2017-28946"**, adelantado en su contra por la Gerencia Departamental Colegiada del Meta de la Contraloría General de la República, Entidad Afectada **EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL.**

Se le hace saber que esta se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del correo electrónico que sea enviado. Para lo anterior, se tendrá en cuenta lo señalado en el artículo los términos de la Ley 1474 de 2011 artículo 116.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno. Así como También se corre traslado De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 610 de 2000, surtida la notificación personal, se hace saber a cada uno de los presuntos responsables fiscales, al tercero civilmente responsable y a sus apoderados de confianza, que disponen de un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente Auto, para presentar los argumentos de defensa frente a la imputación efectuada, así como para solicitar y aportar las pruebas que pretendan hacer valer los cuales abran de ser radicados a [cgr@contraloria.gov.co](mailto:cgr@contraloria.gov.co) advirtiéndole que durante dicho término, el expediente permanecerá disponible en medios digitales y físico en la secretaría común de la Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

Para efectos de radicación de recursos, oficios, solicitudes o cualquier otra comunicación referente al proceso, deberá enviarlo al correo [cgr@contraloria.gov.co](mailto:cgr@contraloria.gov.co), con copia a [luis.villalba@contraloria.gov.co](mailto:luis.villalba@contraloria.gov.co) con indicación de la Gerencia departamental competente, número del proceso, asunto, Contralor Provincial y abogado sustanciador que conoce del proceso. En caso de no realizarse a ese correo, no se responderá por la recepción del mensaje.

Nota: Por favor hacer caso omiso al oficio enviado con SIGEDOC 2024EE0233975, ya que en virtud a un error involuntario se referencio un numero de proceso errado.

Atentamente,

**DIANA MARCELA ARISMENDY REY**

Profesional Unversitaria G-02

Funcionaria asignada a Secretaría Común

Ordenó: Luis Alfonso Villalba.

Revisó: Diana Arismendy Rey

Elaboró y proyectó: Hernando Gonzalez Leon.

Anexo: Auto 0392 en (38) folios.

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S certifica que ha realizado por encargo de **Contraloría General de la República - Secretaría Comun GDC Meta** identificado(a) con **NIT 899999067** el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Remitente - Destinatario. Acreditado por el organismo nacional de acreditación (ONAC) con el código 16-ECD-004.

Según lo consignado en los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

#### Resumen del mensaje

**Id mensaje:** 212482  
**Remitente:** cntrRepua@cntrRepua.gov.co (sec.comun.meta@contraloria.gov.co)  
**Cuenta Remitente:** correocertificadonotificaciones@4-72.com.co  
**Destinatario:** francrojas414@gmail.com - francrojas414  
**Asunto:** Notificación por correo electrónico del Auto No. 0392 del 15 de noviembre de 2024. GONZALO MURILLO ESCOBAR.  
**Fecha envío:** 2024-12-18 16:11  
**Documentos Adjuntos:** Si  
**Estado actual:** El destinatario abrió la notificación

#### Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Estampa de tiempo al envío de la notificación</b>  El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - <b>Artículo 23 Ley 527 de 1999.</b></li></ul>	<b>Fecha:</b> 2024/12/18 <b>Hora:</b> 16:16:39	<b>Tiempo de firmado:</b> Dec 18 21:16:39 2024 GMT <b>Política:</b> 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.9.
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Acuse de recibo</b>  Con la recepción del presente mensaje de datos en la bandeja de entrada del receptor, se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos legales de acuerdo con las normas aplicables vigentes, especialmente el <b>Artículo 24 de la Ley 527 de 1999</b> y sus normas reglamentarias.</li></ul>	<b>Fecha:</b> 2024/12/18 <b>Hora:</b> 16:16:40	Dec 18 16:16:40 ei-t205-282cl postfix/smtp[31669]: 36B6E1248764: to=<francrojas414@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.197.26]:25, delay=1.2, delays=0.15/0.02/0.48/0.57, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK 1734556600 41be03b00d2f7-801d5ac5a7f5i11681376a12.1 68 - gsmtpl)
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>El destinatario abrió la notificación</b></li></ul>	<b>Fecha:</b> 2024/12/18 <b>Hora:</b> 16:22:29	<b>Dirección IP:</b> 66.102.8.105 <b>Agente de usuario:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggphpt.com GoogleImageProxy)

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

**Importante:** En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, en estos casos, si el mensaje no pudo ser entregado dicho servidor enviará una segunda respuesta indicando que no fue exitosa la entrega del mensaje, si no hay una segunda respuesta del servidor de correo electrónico, quiere decir que tu mensaje fue entregado satisfactoriamente por lo que este documento pasa a constituir acuse de recibo

#### Contenido del Mensaje

2024620282832

668

**Francisco Rojas Mendoza.**

**Abogado.**

**Universidades Católica, Autónoma y Externado de Colombia.**

Bogotá D.C., 11 de Diciembre de 2024

Doctor

**LUIS EDUARDO VALLEJO ARAÚJO**

Contralor Provincial Ponente

Gerencia Departamental Colegiada del Meta

Contraloría General de la República

Villavicencio

Ref.: Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 80503-2017-28946

Auto de Imputación No. 0392 de fecha 15-XI-2024

Fecha de la Notificación por correo electrónico: 27 de noviembre de 2024

Imputados: **CORPORACION PAIS RURAL, JULIO CESAR ZULETA Y OTROS.**

Señor Contralor:

**FRANCISCO ELADIO ROJAS MENDOZA**, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4'148.071 expedida en Macanal (Boyacá) y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 93.650 conferida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de Defensor del señor **GONZALO MURILLO ESCOBAR** quien ahora funge como imputado fiscal dentro de los diligenciamientos que se citan en la referencia, atenta y respetosamente concurro ante la Gerencia Departamental Colegiada en la cual Usted es ponente, para descorrer el término de traslado señalado en la providencia igualmente reseñada y para efectuar dentro de él, los pronunciamientos a los cuales hay lugar en derecho.

De entrada manifiesto, que no puede haber lugar a la Imputación de Responsabilidad Fiscal, por cuanto no concurren todos los elementos propios de ella conforme a las previsiones de la Ley 610 de 2000, norma que servirá de guía metodológica para la exposición de los argumentos jurídicos que la defensa a mi cargo aduce para desvirtuar dicha incriminación.

#### **1. LA PRESUNTA CULPA GRAVE ATRIBUÍDA A LA CONDUCTA DE MI REPRESENTADO**

La noción de culpa, se ha dicho legal, doctrinaria y jurisprudencialmente; es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico no querido por él, pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo con sus condiciones personales y las circunstancias en las cuales actuó. Es decir, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo.

El artículo 63 del Código Civil definió como culpa grave, la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

## Francisco Rojas Mendoza.

Abogado.

### Universidades Católica, Autónoma y Externado de Colombia.

La culpa no es una categoría jurídica independiente en un sistema de responsabilidad. Sin duda, necesariamente está ligada al modo de ocurrencia de una conducta.

El análisis de la culpa es un presupuesto que se hace siempre después de la ocurrencia de un comportamiento. En este contexto, Tamayo Jaramillo plantea que *"en la responsabilidad civil es esencial que haya un comportamiento mediato o inmediato del responsable."*<sup>1</sup>

Un análisis de culpabilidad no podría hacerse al margen de una conducta. Quizá este hecho explica por qué la culpa es considerada como el aspecto subjetivo del comportamiento. Las intenciones o la conciencia individual, en un régimen subjetivo de responsabilidad, no podrían estar desligados de la conducta al momento de imputar consecuencias jurídicas por la realización de un acto ilícito. La conducta humana requerida para la atribución de responsabilidad puede ser positiva o negativa, es decir, al derecho le interesan tanto los cambios que expresamente hace el individuo como los resultados que son producto de su omisión. En este sentido, el profesor Tamayo es claro en afirmar que

*"Bien vistas las cosas, sin que haya una conducta activa u omisiva de por medio, la responsabilidad civil es impensable. Incluso, toda responsabilidad normativa, bien sea jurídica, moral o religiosa, supone siempre un comportamiento activo u omisivo del obligado"*

Un régimen de responsabilidad siempre presupone la realización de conductas que se concretan en un resultado ilícito. La conducta, cuyo resultado es objeto de un juicio de atribución, puede ser una acción u omisión. Los cambios en el mundo exterior no siempre son el producto de movimientos corporales, pues en algunas circunstancias no hacer, cuando existe la obligación de intervenir o pudo preverse la consecuencia, es equivalente a contribuir en la producción de un resultado. Aunque Tamayo Jaramillo alude a la responsabilidad civil; sin duda, los aspectos mencionados son aplicables a otras formas de responsabilidad. Las cuestiones ya señaladas también aluden a los rasgos generales de la responsabilidad que son aplicados en el derecho penal o, en el asunto que nos ocupa, que es el de la responsabilidad fiscal.

Un concepto de responsabilidad implica enunciar sus características definitorias, y por supuesto dejar claro qué se entiende por culpa. En este sentido, Tamayo Jaramillo señala que: *"... la palabra culpa tiene dos significados: Uno genérico que es sinónimo de falta y otro más específico que es sinónimo de negligencia"*.<sup>2</sup>

En la noción que se acaba de exponer, es posible resaltar las categorías falta y negligencia. Estos conceptos permiten identificar ciertos estándares normativos que se exigen de una conducta con el fin de establecer la respectiva calificación, la cual requiere de normas que fijan patrones ideales de comportamiento. Un estándar suele manifestarse — por ejemplo — en el ideal de comportamiento expresado en la noción *buen padre de familia*, el cual supone una especie de baremo para comparar y calificar el actuar humano en ciertas circunstancias. Con este instrumento conceptual es posible determinar si el comportamiento de un sujeto es culposos o no.

<sup>1</sup> Tamayo Jaramillo, Javier. *Tratado de Responsabilidad Civil*. Tomo 2. Bogotá: Legis. 2015. Pág. 188

<sup>2</sup> Tamayo Jaramillo, Javier. *Op. Cit.* Pág. 192

## Francisco Rojas Mendoza.

Abogado.

### Universidades Católica, Autónoma y Externado de Colombia.

Una función similar la desempeña el concepto deber objetivo de cuidado que también se usa para comparar y medir, de cierta manera, el comportamiento de una persona al momento de establecer si su actuar se enmarca dentro de lo que podría considerarse como comportamiento culposo. En términos generales, es posible concluir que la culpa se refiere a un actuar descuidado, negligente, ligero, es decir, el sujeto deja de lado los estándares básicos que implican la vida en sociedad. Un sujeto cuidadoso es consciente de que su conducta produce efectos en el mundo físico y, en esa medida, procura evitar el impacto negativo que tiene sobre los bienes jurídicos reconocidos a los demás integrantes de la comunidad política.

El comportamiento culposo es reprochado por su carácter potencialmente dañoso, esto es, por las consecuencias empíricas que produce sobre la vida, salud o bienes tanto patrimoniales como no patrimoniales de los demás. En el caso de la responsabilidad fiscal, el efecto del daño se produce sobre el patrimonio público. La culpa envuelve un resultado dañoso sobre recursos públicos y, en consecuencia, dada la producción de este resultado, se juzga la conducta del agente. La culpa y la conducta o hecho culposo son conceptos distintos que no pueden confundirse. La culpa es una cualidad o propiedad que se atribuye a una conducta humana. La conducta o hecho culposo son eventos en cuanto tales, es decir, consiste en el cambio del mundo exterior la consecuencia que produce un comportamiento cuando el agente no actuó como lo habría hecho una persona prudente, tal y como lo enseña nuestro autor de cabecera.<sup>3</sup>

#### La culpa en el régimen vigente de responsabilidad fiscal

En el derecho público, la culpa también es un instrumento para la evaluación de las conductas que originan consecuencias jurídicas en materia de responsabilidad fiscal. Este no es su único ámbito de aplicación, pues ha sido ampliamente utilizado en el derecho administrativo sancionatorio. Sin embargo, en el derecho fiscal cumple un papel fundamental.

La Ley 610 de 2000, en su artículo, 4 parágrafo segundo, inicialmente había establecido que *"El grado de culpa a partir del cual se podrá establecer responsabilidad fiscal será el de la culpa leve"*. Sin embargo, este apartado de la disposición citada fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-619 de 2002. Al respecto, el tribunal constitucional señaló:

*"El criterio de imputación a aplicar en el caso de la responsabilidad fiscal no puede ser mayor al que el constituyente fijó para la responsabilidad patrimonial del funcionario frente al Estado, pues se estaría aplicando un trato diferencial de imputación por el solo hecho de que a la declaración de responsabilidad se accede por distinta vía. De aceptarse el tratamiento diferencial, se estaría desconociendo abruptamente el fundamento unitario y la afinidad y concordancia que existe entre los distintos tipos de responsabilidad que confluyen sin distingo ninguno en la defensa del patrimonio público"*.

<sup>3</sup> Tamayo Jaramillo, Javier. Op. Cit. Pág. 193

## Francisco Rojas Mendoza.

Abogado.

### Universidades Católica, Autónoma y Externado de Colombia.

La citada decisión de la Corte Constitucional condujo a que el fundamento para la calificación de la conducta fuera el dolo o la culpa grave. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 se tomó como referencia la definición de culpa grave contemplada en la Ley 734 de 2002, que entonces regulaba estas materias en sus artículos 42 a 51 y en el artículo 48 establecía de manera pormenorizada las consideradas como faltas gravísimas. También se tomó como punto de referencia la Ley 678 de 2001 que en su artículo 6° estableció una serie de presunciones respecto a la culpa grave. En esta etapa de la evolución de la responsabilidad fiscal se debieron usar estos marcos normativos para juzgar conductas calificadas como culposas.

Un parámetro normativo propio para el derecho fiscal fue establecido en la Ley 1474 de 2011 que, en su artículo 118, reguló la culpa grave de la siguiente manera:

*“Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos:*

*a) Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o términos de referencia en forma incompleta, ambigua o confusa, que hubieran conducido a interpretaciones o decisiones técnicas que afectaran la integridad patrimonial de la entidad contratante;*

*b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado;*

*c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas;*

*d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos;*

*e) Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás emolumentos y haberes laborales con violación de las normas que rigen el ejercicio de la función pública o las relaciones laborales”.*

En estos términos, la Ley 1474 de 2011 estableció una serie de presunciones para considerar cuándo una conducta puede calificarse como culposa. La descripción ya realizada evidencia que la culpa en el derecho fiscal ha sufrido diferentes modificaciones jurisprudenciales y legales. Esta transformación no solo ha profundizado las garantías de defensa, sino que ha precisado sus condiciones de aplicación. Al momento de expedición de la citada Ley 1474, los funcionarios encargados de adelantar los juicios de responsabilidad fiscal no contaban con un marco normativo específico para la evaluación de las conductas constitutivas de responsabilidad fiscal. Por esta razón, debían acudir a normas similares con fundamento en la analogía, la cual sirvió como marco hermenéutico para catalogar determinadas conductas como culposas en la modalidad de culpa grave. Esta circunstancia implicaba un esfuerzo dialéctico adicional para el encargado de

621

672

**Francisco Rojas Mendoza.**

**Abogado.**

**Universidades Católica, Autónoma y Externado de Colombia.**

adelantar los juicios de responsabilidad fiscal. Además, generaba dificultades en la aplicación de este tipo de responsabilidad fiscal dadas las garantías del debido proceso, tipicidad, legalidad y demás derechos conexos.

La Ley 1474 de 2011 incluyó un campo definido y expreso de interpretación para el funcionario competente en materia de responsabilidad fiscal. Además, ofreció herramientas que permitirían sustentar sus argumentos y, con las presunciones incluidas respecto a la culpa grave, permitían visualizar de manera más clara las situaciones constitutivas de una actuación culposa.

La culpa grave o gravemente culposa es entonces el elemento básico para calificar una conducta constitutiva de daño patrimonial. La más reciente normatividad en temas de responsabilidad fiscal no define qué se entiende por conducta gravemente culposa. No se fijan unos criterios claros más allá de las presunciones señaladas en la Ley 1474 de 2011. Dada la falta de definición de este concepto, es necesario acudir a otras legislaciones que tratan temas similares. Dado el escaso desarrollo de este concepto en el plano de la responsabilidad fiscal, los funcionarios encargados de adelantar este tipo de juicios deben recurrir a conceptos dogmáticos para establecer cuándo la conducta de un sujeto se puede considerar como gravemente culposa.

En resumen, la Ley 610 de 2000 fue objeto de un desarrollo jurisprudencial que excluyó la culpa leve para calificar la conducta constitutiva del daño fiscal. Este hecho determinó que la culpa grave fuera incluida como parámetros en el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011.

Esta normatividad trajo elementos orientadores sobre la base de presunciones y aumentó el estándar probatorio para definir la responsabilidad fiscal. Sin embargo, el Decreto 403 de 2020 – que no ha logrado resistir todos los exámenes de constitucionalidad que le han sido realizados – no amplió ni precisó los parámetros para establecer qué se entiende por conducta gravemente culposa. En otros términos, tampoco orientó la actividad interpretativa del juzgador.

En el caso concreto, puntual y específico del señor **GONZALO MURILLO ESCOBAR** y conforme a los lineamientos teóricos y doctrinarios que se acaban de exponer, es claro que de mi representado no puede predicarse ni fáctica ni jurídicamente la **CULPA GRAVE** de que se habla en el Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal frente al cual me estoy pronunciado, por las razones de hecho y de derecho que pasan a exponerse a renglón seguido:

1. Se extraña y sorprende el suscrito defensor de lo dicho en la pieza procesal con respecto a la cual me estoy pronunciando (fol. 35/38), en el sentido de que las explicaciones dadas en su versión libre por mi representado son simples excusas o evasivas. Debo decir que se apresura la Contraloría al desestimar que quienes como en el caso de los Gestores del Convenio tenían la obligación de reportarle al Administrador y enterarlo de los avances y no lo hayan hecho, ello no tenga ninguna relevancia jurídica a la hora de determinar el fenómeno de la culpa que ahora ocupa nuestra atención.
2. Según el Manual de Funciones, a los Gestores correspondía la importante función de informar los avances en desarrollo del convenio, insumo éste que le permitiría al Administrador sustentar y soportar las decisiones a adoptar en aras de garantizar el cabal desarrollo de las actividades contenidos tanto en el objeto como en el alcance del convenio.



627

**Francisco Rojas Mendoza.**

**Abogado.**

**Universidades Católica, Autónoma y Externado de Colombia.**

3. De la atenta lectura que se haga de las funciones que según el Manual debía cumplir el Gestor Técnico, por lado alguno se encuentra que a ellos les correspondiera impartir el visto bueno para el giro de recursos. Y es que debiendo haber sido mi poderdante quien debía dar el visto bueno para transferir los recursos, quien se arrogó tal atribución fue el señor **JULIO CESAR ZULETA FUENTES**, Gestor Técnico del Convenio. Palmario es entonces que el referido gestor se atribuyó funciones que no le correspondían.
4. En su salida procesal rindiendo versión libre, mi representado fue claro y enfático al señalar que durante el breve lapso en el cual fungió como Administrador del Convenio, es decir entre el 12 de julio de 2012 y el día 28 de febrero de 2013; lo hizo de modo responsable, diligente y cuidadoso. Importante resaltar que para el caso del Adicional 1, solo estuvo al frente en tal calidad desde el 28 de diciembre de 2012 hasta el 28 de febrero de 2013. En efecto, durante dicho espacio temporal y cumpliendo con su deber funcional, se aseguró del cabal cumplimiento de trascendentales funciones, tales como las siguientes:
  - i. Fue celoso y sobre todo exigente en lo relacionado con la puntual constitución del Encargo Fiduciario para el manejo de los recursos del convenio, lo cual ocurrió el día 3 de agosto del año 2012, suscribiéndose tal contrato Ecopetrol y el Banco de Occidente.
  - ii. Estuvo al tanto de la cumplida suscripción del acta de inicio como era su deber, lo cual ocurrió el día 29 de octubre de 2012, de estricta conformidad con las normas internas que Ecopetrol tenía establecidas para ese propósito concreto.
  - iii. Fue diligente respecto a la oportuna, cumplida y correcta expedición de la garantía exigida en el convenio 5211512, de tal manera que fue Aseguradora Solidaria de Colombia quien expidió el día 11 de julio 2012 la respectiva póliza identificada con el N°905-4799400000093 con vigencia hasta el 11 de junio de 2014.
5. De haber sido negligente mi prohiljado y de no haberse atendido con diligencia y cuidado tales deberes y atribuciones, no hubiera sido posible que el citado garante respondiera como lo hizo conforme a sus obligaciones civiles y mercantiles en tratándose del contrato de seguro al que aluden los artículos 1036, siguientes y concordantes del Código de Comercio.
6. Ahora bien: se pregunta el suscrito apoderado, porqué razón siendo el convenio 5211512 un contrato de tracto sucesivo, cuya ejecución y liquidación se prolongó por más de cuatro (4) años y dentro de los cuales el señor **GONZALO MURILLO ESCOBAR** fue Administrador tan solo por siete (7) meses y dieciséis (16) días; hoy se le pretende imputar responsabilidad fiscal como si él solo hubiese sido su Administrador durante todo el lapso de vigencia de tal acuerdo de voluntades.

674

**Francisco Rojas Mendoza.**

**Abogado.**

**Universidades Católica, Autónoma y Externado de Colombia.**

7. Según se indicó en el ordinal 5° de esta enumeración, tras la reclamación en su momento formulada por Ecopetrol, Aseguradora Solidaria de Colombia procedió al pago de la suma de \$ 2.755.272.804 a título indemnizatorio, absteniéndose de pagar los restantes \$ 288.711.714 que fueron materia de objeción parcial y que aquí representan el daño patrimonial cuyo resarcimiento pretende la Contraloría.
8. Trascendental resulta precisar aquí, que de la última suma antes mencionada, la cantidad de \$ 195.000.000 corresponden al aporte inicial de Ecopetrol destinado a pagar los gastos de administración a País Rural, valor éste que al haber sido consignado al patrimonio autónomo, quedó debidamente cubierto con la póliza desde el inicio del convenio, toda vez que dicha suma no hizo parte del Adicional 1. Los restantes \$ 93.711.714 fueron aportes girados por Ecopetrol en el marco de la mencionada adición de valor al convenio y que hoy son materia de debate judicial.
9. La controversia por el pago de tal suma dejada de asumir por Aseguradora Solidaria de Colombia como Garante, fue objeto del Medio de Control de Controversias Contractuales promovido por Ecopetrol en contra de esta compañía de seguros, que cursó trámite en el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio dentro del expediente No. 50001-33-33-008-2017-00353-00. Si bien dicho litigio terminó con sentencia desestimatoria de las pretensiones inicialmente incoadas, esa providencia de primera instancia hoy se halla en el Tribunal Administrativo del Meta donde se surte el recurso de apelación interpuesto por Ecopetrol en contra de tal decisión que favorece a la aseguradora.
10. Así las cosas, y mientras no se resuelva de fondo la controversia judicial, es claro que la no puede hablarse de *daño cierto* en la medida en la cual de llegar a revocarse la sentencia de primera instancia y de tener que asumir la Aseguradora el valor total del siniestro asegurado, faltaría aquí el segundo elemento de la responsabilidad fiscal, tal y como lo exige el artículo 5° de la Ley 610 de 2000.
11. Importante resulta señalar también aquí, que si bien la doctrina y la jurisprudencia constitucional ha sido constante y reiterativa en el sentido de que si bien, el legislador goza de un amplio margen de discrecionalidad al momento de diseñar el trámite de los procesos por responsabilidad fiscal, también lo es que se encuentra limitado por las previsiones del artículo 29 Superior, atinentes al derecho al debido proceso.
12. Ni modos de eludir un importante asunto: si como la propia Contraloría lo señala – y así lo acepta Ecopetrol – se tuvo conocimiento del presunto manejo irregular de los recursos hasta el día 27 de febrero de 2016 cuando se produjo la liquidación del convenio, cómo entonces se puede predicar que mi cliente hubiera tenido conocimiento de las maniobras fraudulentas de quienes propiciaron que los recursos fueran a parar a una cuenta distinta del Patrimonio Autónomo constituido para el efecto por concreta gestión funcional de mi patrocinado en el breve término en el cual se desempeñó como Administrador del convenio?

675

**Francisco Rojas Mendoza.**

**Abogado.**

**Universidades Católica, Autónoma y Externado de Colombia.**

13. Conforme a lo expuesto en precedencia, es claro que no se registra el comportamiento mediato o inmediato exigido por la teoría de la culpa, que pueda conducir a la imputación de su responsabilidad en el presente averiguatorio fiscal por parte del señor **GONZALO MURILLO ESCOBAR**.

14. Como corolario de todo lo aquí planteado, debo rematar diciendo que las consideraciones insertas en el presente acápite tienen la plena virtualidad de liberar a mi cliente de la atribución de culpa grave tal y como lo hace la Contraloría, máxime cuando ninguna de las presunciones de culpa establecidas en el artículo 118 del Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011 le puede ser aplicada.

En síntesis: con los documentos y pruebas aportadas al proceso adelantado en contra de mi poderdante, no hay elementos que indiquen la existencia de conducta cometida bajo la modalidad de culpa grave con ocasión de los hechos que le dieron origen al presente proceso de responsabilidad fiscal, por cuanto sus actuaciones estuvieron plenamente ceñidas al ordenamiento jurídico vigente.

## **2. EL SUPUESTO DAÑO PATRIMONIAL IRROGADO A ECOPETROL POR PARTE DEL SEÑOR GONZALO MURILLO ESCOBAR**

De estricta conformidad con lo señalado en el numeral 9° de la relación factico jurídica que antecede, mientras no se resuelva de fondo la controversia judicial a la cual allí se aludió no puede hablarse de daño cierto. En efecto, de llegar a revocarse la sentencia de primera instancia y de tener que asumir la Aseguradora el valor total del siniestro asegurado, brillaría por su ausencia el segundo de los tres elementos de la responsabilidad fiscal que perentoriamente exige el artículo 5° de la Ley 610 de 2000.

Queda claro entonces, que el presunto daño cierto que se predica dentro del presente averiguatorio fiscal, tampoco existe jurídicamente

## **3. EL NEXO CAUSAL.**

El tercer elemento de la responsabilidad fiscal debe ser visto – advierte la autorizada doctrina nacional –<sup>4</sup> a través de un lente hermenéutico distinto, que refracte no ya la simple causalidad física de la conducta antijurídica frente al daño imputado, sino una causalidad jurídica, emanada del papel de exigibilidad personal funcional o contractual, derivada de las normas indicadoras generales, principios y de las normas específicas.<sup>5</sup>

Suficientemente esclarecido el asunto, sobre todo por parte de la Corte Constitucional en su copiosa jurisprudencia sobre la materia, es claro que la relación de causalidad, determinante y condicionante de la causa-efecto, no puede llegar a configurarse en el presente caso, hoy sometido a escrutinio jurídico fiscal por parte de la Contraloría.

<sup>4</sup> Gómez Lee, Iván Darío. *Responsabilidad fiscal y gerencia de recursos públicos*. Bogotá, D.C. Legis S.A. 2014, pág. 295

<sup>5</sup> Amaya Olaya, Uriel. *Teoría de la responsabilidad fiscal. Aspectos sustanciales y procesales*. Bogotá, D.C. Universidad Externado de Colombia. 2002, pp. 203-204

**Francisco Rojas Mendoza.**

**Abogado.**

**Universidades Católica, Autónoma y Externado de Colombia.**

Y ello, por cuanto al no haber conducta gravemente culposa, al no tratarse de un daño antijurídico cierto al patrimonio de Ecopetrol, mucho menos podrá buscarse aquí que exista nexo de causalidad. Huelgan entonces, mayores comentarios sobre el tema.

### **PRUEBAS**

Atendida su conducencia, pertinencia y utilidad, y para que obren como tales en favor de mi representado; y en caso de no ser despachada favorablemente la petición inserta al final de este libelo, solicito al Despacho se sirva decretar, practicar y tener como tales las siguientes:

#### **- Documentales**

Ruego a la colegiatura fiscal se sirva ordenar:

1. Que se oficie al área contable de Ecopetrol para que proceda a enviar con destino al expediente, los comprobantes de causación y pago de la autorización de pago calendada del 12 de diciembre de 2012, identificando el área que remitió el documento, así como los profesionales que participaron en el proceso de registro.
2. Que se oficie al área de presupuesto de Ecopetrol para que envíe los soportes documentales de la creación de los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y los certificados de registro presupuestal (CRP), así como los nombres de quienes tramitaron y firmaron dichos documentos.
3. Que se oficie al área de Abastecimiento de Ecopetrol, para que remita las copias firmadas de cada uno los nombramientos de Gestores Técnicos y Administrativos durante todo el tiempo que duró la ejecución y liquidación del convenio.
4. Que se le ordene al Banco de Occidente poner a disposición de la Contraloría y para que también se incorporen al expediente, los extractos bancarios de la cuenta No. 291-01128-6 desde su creación.
5. Que se le ordene a la Fiduciaria del Banco de Occidente, aportar la totalidad de las actas y de los informes de avance en el proceso de desembolso de los recursos del convenio que le fueron confiados para su administración y manejo.
6. Que se oficie a las aseguradoras, para que alleguen una copia tanto de las pólizas como de sus respectivas adiciones, señalando claramente quién solicitó su expedición.

Con todas las anteriores probanzas se busca demostrar:

- i. Que mi patrocinado no tuvo ninguna participación en el proceso de giro de los recursos del convenio que fueron a parar a una cuenta diferente a la del patrimonio autónomo constituido para el efecto.

677

**Francisco Rojas Mendoza.**

**Abogado.**

**Universidades Católica, Autónoma y Externado de Colombia.**

- ii. Que ni la Gestoría Administrativa ni la Gestoría Técnica le informaron a mi mandante de tales procedimientos, orientados a transferir los fondos a la antedicha cuenta bancaria a nombre del ejecutor del convenio.
- iii. Que al no haberse registrado conducta activa u omisiva por parte de mi defendido, la responsabilidad fiscal que aquí se predica resulta plenamente descartada.
- iv. Que las razones aducidas por mi prohijado no son excusas ni son evasivas como se dice en el auto de imputación de responsabilidad fiscal librado en su contra.

**- Testimoniales.**

Solicito se haga comparecer ante la Contraloría a las siguientes personas:

- **ISABEL CRISTINA AMPUDIA RENDÓN:** Actual funcionaria de Ecopetrol quien se desempeña como Gerente Territorial y H.S.E. de Hidrocarburos de la misma empresa, y quien tuvo conocimiento oficial acerca las irregularidades registradas en el convenio con la Corporación País Rural.
- **RAFAEL ENRIQUE RAMOS JIMENEZ:** Exfuncionario y contratista que fue de la Dirección de Gestión Social de Ecopetrol, quien depondrá sobre los procedimientos administrativos que debían surtirse en materia de convenios.

Depondrán ellos todo cuanto sepa y les conste sobre la materia del presente proceso fiscal, muy en particular respecto a:

- El trámite que conforme a los Manuales de Funciones de Ecopetrol debía darse a todos los procesos relativos a la planeación, ejecución, administración y gestoría de los convenios suscritos por la empresa.
- La trazabilidad que según tales instrumentos de gestión debía ser igualmente observada por los Administradores y Gestores de Convenios suscritos por Ecopetrol.
- Las consultas que a nivel de asesoría respecto a procedimientos y procesos fueron formuladas por mi patrocinado a los profesionales antes citados.

**SOLICITUD ESPECIAL**

Por la razón esgrimidas en el numeral 9º del primer acápite de este escrito, solicito respetuosamente al Despacho de la colegiatura, se sirvan suspender el curso procesal de las presentes actuaciones, hasta que se conozca la decisión del Honorable Tribunal Administrativo del Meta desatando el recurso de alzada interpuesto dentro del medio de control de controversias contractuales reseñado en el numeral 8º del mismo apartado, cuyo actual estado puede consultarse en el aplicativo SAMAI, que a la fecha registra el siguiente detalle:

670

**Francisco Rojas Mendoza.**  
*Abogado.*  
**Universidades Católica, Autónoma y Externado de Colombia.**

total registros: 8    Pág. 1 de 1

	Fecha registro	Fecha actuación	Actuación	Notación/Detalle	Estado	Atenas	Indice
Select	24/01/2023 8:00:00	24/01/2023	Constancia secretarial	(El Secretario del Tribunal Administrativo del Meta...	REGISTRADA	0	00008
Select	17/06/2022 12:00:41	17/06/2022	Al despacho para sentencia		REGISTRADA	0	00007
Select	12/11/2021 14:56:50	12/11/2021	Notificación Personal	NOTIFICACION AUTO ADMITE RECURSO DE APELACION PROC...	REGISTRADA	1	00006
Select	04/11/2021 14:44:26	04/11/2021	Envío De Notificación	NOTIFICACION ESTADO No 183 TIBA DEL 04 DE NOVIEMBRE...	REGISTRADA	1	00005
Select	03/11/2021 15:31:08	03/11/2021	Fijación Estado		REGISTRADA	0	00004
Select	03/11/2021 15:31:08	03/11/2021	Auto Admite	ADMITE APELACIÓN DANDO APLICACIÓN AL ARTICULO 67 D...	REGISTRADA	1	00003
Select	03/11/2021 15:11:39	03/11/2021	Al Despacho		REGISTRADA	0	00002
Select	24/09/2021 14:53:26	24/09/2021	Radicación Y Reporto	ACTUACIÓN RADICACIÓN Y REPORTE	REGISTRADA	0	00001

Fuente: [https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list\\_procesos.aspx?quid=500013333008201700353015000123](https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?quid=500013333008201700353015000123)  
Consultado hoy 10 de diciembre de 2024

Para el efecto, estimo importante señalar aquí, que si bien la doctrina y la jurisprudencia constitucional ha sido constante y reiterativa en el sentido de que si bien, el legislador goza de un amplio margen de discrecionalidad al momento de diseñar el trámite de los procesos por responsabilidad fiscal, también lo es que se encuentra limitado por las previsiones del artículo 29 Superior, atinentes al derecho al debido proceso.

Y la especie de prejudicialidad que aquí se solicita, en nada riñe con el ordenamiento procesal en materia de procesos de naturaleza fiscal.

**SOLICITUD FINAL**

Relevado el suscrito apoderado de mayores disquisiciones jurídicas, ruego respetuosamente al despacho colegiado de la Contraloría, dar aplicación al contenido del artículo 16 de la Ley 610 de 2000 que puntualmente establece las causales de terminación del presente proceso, por cuanto no concurren los elementos que permitan configurar el fenómeno jurídico de la responsabilidad fiscal.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, solicito igualmente decretar el archivo de las presentes diligencias administrativas.

679

**Francisco Rojas Mendoza.**  
**Abogado.**  
**Universidades Católica, Autónoma y Externado de Colombia.**

**NOTIFICACIONES**

MI representado las recibirá en su buzón de correo electrónico que es:

[gonzalo.murillo@ecopetrol.com.co](mailto:gonzalo.murillo@ecopetrol.com.co)

La señora **ISABEL CRISTINA AMPUDIA RENDÓN**, en la siguiente dirección electrónica:

[isabel.ampudia@ecopetrol.com.co](mailto:isabel.ampudia@ecopetrol.com.co)

El señor **RAFAEL ENRIQUE RAMOS JIMENEZ**, en el siguiente buzón de correo electrónico personal:

[rafaramos1046@gmail.com](mailto:rafaramos1046@gmail.com)

El suscrito apoderado, en el siguiente correo electrónico

[francrojas414@gmail.com](mailto:francrojas414@gmail.com)

Muy respetuosamente,



**FRANCISCO ELADIO ROJAS MENDOZA**  
C.C. No. 4'148.071 de Macanal  
T.P. No. 93.650 del C. S. de la J.